

0198-2015/CEB-INDECOPI

29 de mayo de 2015

EXPEDIENTE N° 000009-2015/CEB
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DENUNCIANTES : ALBITER DELGADO CIEZA
RESOLUCIÓN FINAL

SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el numeral 25.2.1) del artículo 25° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y en el Procedimiento N° 31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La ilegalidad radica en que la referida prohibición vulnera el artículo 5° de la Ley 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición, pese a que se trata del establecimiento de una nueva exigencia.

Se dispone que no se aplique al denunciante la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas:

I. ANTECEDENTES:

A. La denuncia:

1. Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2015, el señor Albitér Delgado Cieza (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad,

originada en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el numeral 25.2.1) del artículo 25º del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC (en adelante, el RNAT) y en el Procedimiento N° 31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio.

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos:

- (i) Es persona natural dedicada al negocio de servicio de transporte de carga por carretera, por lo que requiere contar con la autorización del Ministerio para prestar el servicio de transporte terrestre.
- (ii) No puede obtener la citada autorización, debido a la existencia de una barrera burocrática ilegal establecida en el numeral 25.2.1) del artículo 25º del RNAT y en el Procedimiento N° 31 del TUPA del Ministerio.
- (iii) La exigencia denunciada constituye barrera burocrática ilegal por cuanto no le permite ejercer su derecho a la libre iniciativa, libertad de trabajo, inversión, empresa, libre mercado y comercio.
- (iv) A través de la medida cuestionada el Ministerio impide su derecho de acceder al mercado de prestación del servicio de transporte de carga por carretera con el vehículo de su propiedad y de ampliar la prestación de dicho servicio.
- (v) El artículo 5º de la Ley N° 27181 establece que no se puede alterar las condiciones de mercado sin justificación, por lo que en el presente caso el Ministerio no tiene sustento que respalde que el límite de antigüedad es una variación de mercado idónea.
- (vi) No es lógico ni coherente que el Ministerio alegue que es una medida adecuada y legal que mediante el límite de antigüedad del vehículo se pretenda buscar el buen funcionamiento de los vehículos, dado que para este objetivo es necesario las revisiones técnicas correspondientes.
- (vii) El límite denunciado es regulado por normas de menor jerarquía, a través de un reglamento y TUPA.

(viii) El Ministerio al verificar la antigüedad del vehículo no recepciona la documentación presentada, vulnerando su derecho de acudir a la administración pública.

B. Admisión a trámite:

3. Mediante Resolución N° 0117-2015/STCEB-INDECOPI del 3 de febrero de 2015, se resolvió admitir a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante, al Ministerio y a su Procuraduría Pública el 5 de febrero de 2015; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas¹.

C. Contestación de la denuncia:

4. El 10 de febrero de 2015, el Ministerio presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos:

- (i) Previamente a que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) determine si la disposición cuestionada constituye o no una barrera burocrática, debe precisar las variables e indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública como una barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades; para tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas.
- (ii) El denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto a su caso particular una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que limite su competitividad empresarial en el mercado.
- (iii) El artículo 3° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre, se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como

¹ Cédula de Notificación N° 443-2015/CEB (dirigida al denunciante), Cédula de Notificación N° 444-2015/CEB (dirigida al Ministerio) y N° 445-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio).

la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.

- (iv) El artículo 12° de la referida ley, señala como competencia de gestión la facultad que tienen las autoridades competentes para implementar los principios rectores y las disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente ley y en los reglamentos nacionales.
- (v) El artículo 16° de la Ley N° 27181, establece entre las facultades del Ministerio el otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. Asimismo, le atribuye la potestad de dictar reglamentos nacionales, interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre (en la ley y sus reglamentos), así como velar por su cumplimiento.
- (vi) La determinación de un límite máximo de permanencia no es un hecho aislado que sólo ocurre en nuestro país, pues constituye el reconocimiento que finalmente los vehículos como cualquier máquina producida por el hombre sufran desgaste por el paso del tiempo y el uso continuo. En la actualidad, los avances tecnológicos permiten mayor seguridad, confort y mejor rendimiento en el consumo de combustible.
- (vii) En distintos países de Latinoamérica, con diferentes modelos económicos, algunos en los que se defiende a ultranza de la libertad de mercado y la libre iniciativa privada y otros en los que el Estado interviene como regulador económico, se establece una limitación a la permanencia de los vehículos destinados a la prestación de los servicios de transporte.
- (viii) El sustento de la medida denunciada se encuentra vinculado con tesis doctorales, estudios sobre la seguridad en el transporte, informes emitidos por universidades extranjeras, por la Asociación Automotriz del Perú, estudios de la Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, Organización Panamericana de la Salud, entre otros.
- (ix) El límite objeto de cuestionamiento ha sido establecido sobre la base del artículo 67° de la Constitución Política del Perú², del cual se desprende la

2

Constitución Política del Perú
Artículo 67°.- Política Ambiental

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

competencia del Ministerio sobre la política nacional del ambiente.

- (x) De conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

D. Otros:

- 5. El 16 de febrero de 2015, el denunciante contestó el escrito de descargos presentado por el Ministerio reiterando los argumentos expuestos en su escrito de denuncia.

II. ANÁLISIS:

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:

- 6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, la Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado³.
- 7. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27181 y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las

3

Decreto Ley N° 25868

Artículo 26°BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (...).

normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia⁴.

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.⁵

B. Cuestiones previas:

B.1. Cuestionamiento del Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la presente denuncia:

9. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública como barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas.
10. Asimismo, indicó que la denunciante no ha acreditado que se le haya impuesto a su caso particular alguna barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que limite su competitividad empresarial en el mercado.
11. De acuerdo con lo señalado por dicha entidad, la disposición cuestionada no debería considerarse como barrera burocrática y, en consecuencia, no podría ser conocida por esta Comisión.
12. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 28996, las barreras burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros (en general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas y/o la

⁴ Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
Artículo 20°.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPÍ (...)

⁵ 20.2. Asimismo el INDECOPÍ está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia.

⁵ Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial "El Peruano" el día 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.

tramitación de procedimientos administrativos.

13. El límite máximo, como exigencia para acceder al servicio de transporte público de mercancías, califica como una barrera burocrática según la definición prevista en las normas legales que otorgan competencias a esta Comisión, toda vez que dicha medida incide directamente en la realización de las actividades económicas que desarrolla el denunciante.
14. Así, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, a través de dicha medida se impide al denunciante acceder al mercado de prestación de dicho servicio con sus vehículos y asimismo, ampliar su participación en la prestación del mismo como base en su libre decisión empresarial.
15. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio, dado que la medida denunciada califica como barrera burocrática cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada en el presente procedimiento, toda vez que con la misma afecta el normal desarrollo de las actividades económicas del denunciante.

B.2. Argumento constitucionalidad de las denunciadas:

16. El denunciante ha indicado que la barrera cuestionada afecta su derecho a la libre iniciativa, libertad de trabajo, inversión, empresa, libre mercado y comercio reconocido por la Constitución Política del Perú.
17. Asimismo, el Ministerio señaló que el límite objeto de cuestionamiento ha sido establecido sobre la base del artículo 67° de la Constitución Política del Perú, del cual se desprende su competencia en política nacional del ambiente.
18. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas que conoce y no para evaluar su constitucionalidad.
19. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente N° 00014-2009-PI/TC.
20. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por las partes en

dichos extremos y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.

C. Cuestión controvertida:

21. Determinar si la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el numeral 25.2.1) del artículo 25° del RNAT y en el Procedimiento N° 31 del TUPA del Ministerio, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.

D. Evaluación de legalidad:

22. El artículo 23° de la Ley N° 27181 establece que el Ministerio se encuentra facultado a establecer, a través del RNAT, los requisitos técnicos de idoneidad para la prestación del servicio de transporte en sus diferentes modalidades, entre los cuales se encuentran las condiciones de la flota⁶.
23. De acuerdo a ello, se entiende que la imposición de un límite máximo de antigüedad de los vehículos que prestan el servicio de transporte público de mercancías constituye una manifestación de las competencias normativas del mencionado Ministerio. Dicha competencia ha sido reconocida en anteriores pronunciamientos tanto de la Comisión⁷ como de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala).
24. En base a dichas competencias, a través del numeral 25.2.1) del artículo 25° del RNAT el Ministerio ha dispuesto que la antigüedad máxima de acceso de los

⁶ **Ley N° 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre**
Artículo 23°.- Del contenido de los reglamentos

Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: (...)

d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (...)

Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte. (...)

⁷ Resolución N° 0220-2012/CEB del 23 de agosto del 2012 y Resolución N° 0411-2014/SDC-INDECOPI del 18 de marzo del 2014.

vehículos en el servicio de transporte público de mercancías será de hasta tres (03) años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fabricación del vehículo:

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC

Artículo 25°- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre

(...)

25.2 La antigüedad máxima de acceso y permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de mercancías será la siguiente:

25.2.1 La antigüedad máxima de acceso al servicio para la unidad motriz será de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. (...)

25. Asimismo, el Procedimiento N° 31 del TUPA del Ministerio establece que para otorgar la autorización para prestar servicio de transporte de mercancías en general, requiere que la placa del rodaje de los vehículos no deben superar los tres (3) años de antigüedad, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su fabricación.
26. Si bien el Ministerio cuenta con competencias para emitir este tipo de regulaciones, corresponde evaluar si la misma no vulnera alguna disposición del marco legal vigente referido al subsector de transportes.
27. Sobre el particular, la Ley N° 27181 establece lo siguiente:

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

Artículo 5°.- De la promoción de la inversión privada

(...)

5.2. El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte.

(Énfasis añadido)

28. Como se aprecia, la referida norma favorece a los agentes económicos para que las reglas que regulan el servicio de transporte terrestre se mantengan estables en el tiempo, ello a fin de no modificar las condiciones sobre las cuales se realizan decisiones de inversión y operación. No obstante, la propia norma contempla la posibilidad de alterar dichas condiciones, siempre que tengan un sustento que las respalde, de no ser así, tal variación sería contraria a la Ley N° 27181.

29. En ese sentido, para verificar si la exigencia denunciada constituye una barrera burocrática ilegal debe analizarse si entre la regulación pasada y la actual ha ocurrido una variación en las condiciones; y, de ser el caso, si el Ministerio sustentó previamente la nueva regulación.
30. De acuerdo al criterio establecido por la Sala a través de la Resolución N° 0711-2014/SDC-INDECOPI⁸, para determinar si un cambio normativo, en materia de transporte, vulnera el artículo 5° de la Ley N° 27181 se debe evaluar si dicho cambio se encuentra justificado⁹, *independientemente de los efectos que este haya causado al denunciante hasta el momento de presentación de la denuncia*. Ello debido a que el cuestionamiento efectuado fue realizado en abstracto.
31. De la revisión del marco normativo vigente se aprecia que el límite de antigüedad para vehículos que prestan el servicio de transporte público de mercancías establecido por el numeral 25.2.1) del artículo 25° del RNAT entró en vigencia el 1 de Julio de 2009¹⁰, siendo incorporado al ordenamiento jurídico mediante el Decreto Supremo N° 011-2007-MTC¹¹, publicado el 20 de abril de 2007, por tanto, debe verificarse si existe una justificación para dicho cambio.
32. Como se ha expresado, el artículo 5° de la Ley N° 27181 implica la obligación por parte de las Entidades de la Administración Pública encargadas de la regulación de cada sector, de realizar un análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva exigencia, y evaluar otras opciones regulatorias antes de implementar una determinada medida.
33. Además, debe tenerse en cuenta que en reiterados pronunciamientos¹² la Sala

8 En la citada resolución se cuestionó la misma barrera burocrática que es materia de análisis del presente procedimiento.

9 "26. Por ello, para verificar si la prohibición denunciada constituye una barrera burocrática ilegal debe analizarse únicamente si la misma surgió como consecuencia de un cambio normativo ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 5 de la Ley 27181; y, de ser el caso, si dicho cambio fue justificado".

10 **Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC**
Disposiciones Complementarias Finales
Primera.- Vigencia del Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009 (...)

11 Dicho decreto modifica el artículo 44° del antiguo Reglamento Nacional de Administración de Transportes, incorporando el límite de antigüedad de tres (3) años para los vehículos que pretendan acceder a brindar el servicio de transporte de mercancías.

12 Ver Resoluciones N° 0139-2011/SC1-INDECOPI, N° 0414-2011/SC1-INDECOPI, N° 0796-2011/SC1-INDECOPI, N° 0797-2011/SC1, N° 0921-2011/SC1-INDECOPI, N° 1177-2011/SC1-INDECOPI, N° 1179-2011/SC1-INDECOPI, N° 1180-2011/SC1-INDECOPI, N° 1181-2011/SC1-INDECOPI, N° 0168-2012/SC1-INDECOPI, N° 0661-2012/SC1-INDECOPI, N° 0865-2012/SC1-INDECOPI, N° 0983-2012/SC1-INDECOPI, N° 2925-2012/SC1-INDECOPI, N° 3411-2012/SDC-INDECOPI, N° 0045-2013/SDC-

ha señalado que el cumplimiento del artículo 5º de la Ley N° 27181 no se satisface únicamente con la presentación de información y documentación que justifique la medida adoptada durante el procedimiento seguido ante Indecopi, **sino con que la entidad acredite que el análisis en que se sustenta la norma haya sido efectuado con anterioridad a la emisión del cambio normativo y no con posterioridad al mismo**¹³.

34. De la información presentada por el Ministerio, establecer un límite máximo de antigüedad de tres (3) años, tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad, salud y medio ambiente. Asimismo, se explicó que el límite del tiempo de circulación de los vehículos a un tiempo máximo, asegura que los buses tengan la capacidad de realizar su función de manera satisfactoria para la sociedad, es decir con la seguridad técnica adecuada.
35. Por otro lado, si bien el Ministerio ha acreditado que existe un problema que solucionar en el transporte con relación al desgaste que sufren los vehículos por su uso en un periodo y ha mencionado que esta limitación se aplica en otros países de Latinoamérica, no ha mencionado de qué manera este problema se incrementa o resulta más riesgoso a partir del cuarto (4) año de antigüedad como para resultar necesario limitar la antigüedad de los vehículos a los primeros tres (3) años.
36. Por ello, a entender de esta Comisión, el Ministerio no ha presentado documentación e información que justifique el cambio normativo referido al límite de tres (3) años de antigüedad para vehículos que deseen acceder a brindar el servicio de transporte nacional de mercancías, por lo cual no ha cumplido con lo establecido en el artículo 5º de la Ley N° 27181. Dicho criterio ha sido recogido

INDECOPI, N° 0120-2013/SDC-INDECOPI, N° 0377-2013/SDC-INDECOPI, N° 0433-2013/SDC-INDECOPI, N° 0592-2013/SDC-INDECOPI, N° 0627-2013/SDC-INDECOPI, N° 1104-2013/SDC-INDECOPI, N° 1245-2013/SDC-INDECOPI, N° 0002-2014/SDC-INDECOPI, N° 0178-2014/SDC-INDECOPI, N° 0243-2014/SDC-INDECOPI, N° 0361-2014/SDC-INDECOPI, N° 0608-2014/SDC-INDECOPI, N° 0782-2014/SDC-INDECOPI, N° 0016-2015/SDC-INDECOPI.

13 Mediante Resolución N° 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero del 2011, la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi se ha pronunciado de la siguiente manera al evaluar el cumplimiento del artículo 5º de la Ley N° 27181:

“La Sala considera que una explicación formal y posterior a la emisión de una regulación no constituye una justificación en los términos del artículo 5 de la Ley 27181. (...)

En efecto, la norma busca que solo se realicen los cambios necesarios, procurando mantener las reglas que fueron tomadas en cuenta por los agentes económicos para decidir invertir en el mercado de transporte. Así, antes de establecer una norma que altere las condiciones de acceso o permanencia en el mercado, las autoridades del sector deben demostrar la existencia de un problema de interés público que requiere ser atendido a través de una nueva regulación. Asimismo, para evitar cambios injustificados, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre ha impuesto a las entidades estatales encargadas de la regulación del sector, la carga de realizar un análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva exigencia, y la obligación de evaluar otras opciones regulatorias antes de implementar una determinada medida. Es necesario que este análisis sea efectuado de manera previa a su implementación, ya que lo contrario evidenciaría que la autoridad de transportes estableció una obligación sin respetar el procedimiento formal para su emisión”.

por esta Comisión en anteriores pronunciamientos¹⁴.

37. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías respecto del denunciante, toda vez que la entidad sectorial no ha cumplido con justificar el cambio de condiciones en el mercado de transporte, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 27181.
38. Sin perjuicio de lo señalado, conviene precisar que el presente pronunciamiento no desconoce las facultades del Ministerio para regular el mercado del Transporte. Sin embargo, ello no exceptúa al Ministerio de que los actos y disposiciones que emita con dicha finalidad deban respetar lo dispuesto por el marco legal vigente.

E. Evaluación de razonabilidad:

39. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución N° 182-97-TDC, habiendo identificado que el límite de antigüedad cuestionado constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.

POR LO EXPUESTO:

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807;

RESUELVE:

Primero: desestimar los cuestionamientos y argumentos efectuados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como por el señor Albiter Delgado Cieza, precisados en las cuestiones previas de la presente resolución.

Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, materializado en el numeral 25.2.1) del artículo 25º del Reglamento

¹⁴ Ver Resoluciones N° 0025-2013/CEB-INDECOPI, N° 0210-2013/CEB-INDECOPI, N° 0222-2013/CEB-INDECOPI, N° 0143-2014/CEB-INDECOPI, N° 0165-2014/CEB-INDECOPI, N° 0096-2015/CEB-INDECOPI.

Nacional de Administración de Transporte y en el Procedimiento N° 31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio; en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el señor Albiter Delgado Cieza.

Tercero: disponer que no se aplique al señor Albiter Delgado Cieza la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como todos los actos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996.

Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubía Alzamora.

**LUIS RICARDO QUESADA ORÉ
PRESIDENTE**